

CONSEJO PERMANENTE DE LA  
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

OEA/Ser.G  
CP/CAJP-3026/11 add.1  
23 enero 2012  
Original: textual

CUESTIONARIO DE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS  
SOBRE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

[AG/RES. 2661 (XLI-O/11)]

(Respuestas de los Estados Miembros: El Salvador)



MISIÓN PERMANENTE DE EL SALVADOR  
ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

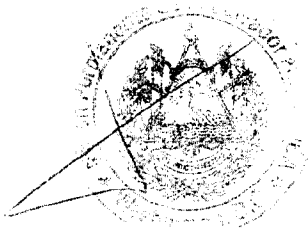
Nota 005/2012

La Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos saluda muy atentamente a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), en ocasión de remitir el "Cuestionario de Legislación y Prácticas sobre Privacidad y Protección de Datos", en el marco de la AG/RES. 2661 (XLI-O/11)

La legislación nacional que fundamenta las respuestas dadas al cuestionario se enviará posteriormente, en vista que por lo voluminosa se ha enviado desde capital via correo aéreo.

La Misión Permanente de El Salvador aprovecha la oportunidad para renovar a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Washington D.C., 11 de enero de 2012



A la  
Presidencia de la Comisión de Asuntos  
Jurídicos y Políticos (CAJP)  
Organización de los Estados Americanos  
Washington, D.C.

1400 16<sup>th</sup>. Street NW Suite 100, Washington, DC., 20036  
Tel. (202)467-0054 Fax (202) 232-4806 [moea@rree.gob.sv](mailto:moea@rree.gob.sv)

## CUESTIONARIO DE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS SOBRE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS<sup>1</sup>

[AG/RES. 2661 (XLI-O/11)]

(Documento presentado conforme a lo acordado en la reunión de la  
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del 6 de octubre de 2011)

Conforme a lo acordado en la reunión ordinaria de la CAJP del 6 de octubre de 2011 y en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2661 (XLI-O/11), que requiere: (1) que el Departamento de Derecho Internacional elabore un estudio comparativo sobre los distintos regímenes jurídicos, políticas y mecanismos de aplicación existentes para la protección de datos personales, inclusive las leyes, reglamentos y autorregulación nacionales, con miras a explorar la posibilidad de un marco regional en esta área y (2) que el Comité Jurídico Interamericano presente, antes del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, un documento de principios de privacidad y protección de datos personales en las Américas, sirvase encontrar adjunto al presente una copia del Cuestionario de legislación y prácticas sobre privacidad y protección de datos.

En cumplimiento de la resolución AG/RES. 2661 (XLI-O/11) y a fin de completar sus mandatos, las respuestas<sup>2</sup> al cuestionario deben enviarse a más tardar el 15 de enero de 2012 a la Secretaría de la CAJP ([aaristizabal@oas.org](mailto:aaristizabal@oas.org)) y al Departamento de Derecho Internacional ([jwilson@oas.org](mailto:jwilson@oas.org)). Favor de dirigir la carta con las respuestas al cuestionario al Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.

### CUESTIONARIO

#### I. LEGISLACIÓN

- A. ¿Existen en el ordenamiento jurídico interno de su país leyes o normas (generales o sectoriales) para la protección de la privacidad o de los datos a nivel nacional o federal? En caso afirmativo, describa brevemente estas leyes o normas, especificando si son aplicables en los contextos de los sectores privado y/o público, y adjunte copia de las disposiciones y documentos en que estén previstas.

**La conformación del Estado Salvadoreño no obedece a estructuras Federales, sino que, como Estado unitario, su ordenamiento jurídico es aplicable a todo el territorio nacional; por lo tanto, las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa abarcan a los catorce departamentos del territorio de la nación, incluidos municipios y localidades.**

- 
1. Preparado por el Departamento de Derecho Internacional.
  2. Además del envío formal de las respuestas por los Estados miembros, la Secretaría solicita atentamente a las delegaciones que también envíen sus respuestas en formato *Word* o dentro del cuerpo de un correo electrónico, para facilitar las traducciones.

En términos generales, El Salvador cuenta con diversas normas vigentes que regulan aspectos esenciales de la protección de la privacidad y de los datos, sin embargo, no existe aún un régimen jurídico que regule de forma sistemática éste derecho.

El derecho a la protección de datos y a la privacidad se entiende contenido implícitamente en el Art.2 de la Constitución que establece: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [...]”.

De la disposición anterior se infiere, que si bien los derechos a la privacidad y protección de datos no están expresamente contemplados en la Constitución, éstos pueden perfectamente encajar dentro de los señalados en dicho artículo, pues son derechos que tienen una estrecha relación con la intimidad personal y familiar y la propia imagen, de tal manera que su tutela no quedaría excluida de los derechos reconocidos en la Constitución.

Por otra parte, algunas normativas secundarias ya incorporan dentro de sus regulaciones disposiciones relacionadas a la privacidad y a la protección de datos, las cuales son aplicables, tanto para el sector público como el sector privado. Dentro de estas normas se encuentran: el Código Penal que regula los delitos relativos al honor y la intimidad (Arts. 177 - 190); el Código Procesal Penal; Ley de Ética Gubernamental; Ley de Protección al Consumidor (Art.49); Ley de Bancos, principalmente en lo referente al secreto Bancario (Art.232) y sus excepciones en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (Arts. 24 y 25); Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos; Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, testigos, peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y en el Proceso Penal, particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada; Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública; la Ley de Acceso a la Información Pública (ya en vigencia pero en proceso de implementación para asegurar su aplicación efectiva), que prohíbe proporcionar información o registros de carácter personal por considerarla confidencial (Arts.24, 31 - 44); la Ley Penal Juvenil (Art.5 letra b) que reconoce el derecho a la intimidad personal de los menores y regula la confidencialidad del Libro de Registro de Internamiento (Arts.122 y 123 regulan); la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia(Art.46) que reconoce el derechos al honor, imagen, vida privada e intimidad; entre otras.

- B. ¿Existen en el ordenamiento jurídico interno de su país leyes o normas (generales o sectoriales) para la protección de la privacidad o de los datos a nivel estatal, municipal o local? En caso afirmativo, describa brevemente estas leyes o normas y adjunte copia de las disposiciones y documentos en que estén previstas.

En El Salvador existen normas que, aunque tienen aplicación en todo el territorio, retoman aspectos esenciales a ser aplicados en el ámbito municipal. Así, se encuentran por ejemplo: la Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad; la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio (Art.3), la cual se refiere a la publicidad de la información de tales registros que llevan las municipalidades; la Ley de Registro de Comercio (Arts. 2,3 y 4) que contempla los fines del registro, la presunción de exactitud de la información contenida en éste, su publicidad y sus excepciones.

- C. ¿Existen en su país disposiciones de rango constitucional que se refieran o aludan a la protección de la privacidad y de los datos como, por ejemplo, disposiciones específicas sobre protección de datos, disposiciones sobre libertad de expresión o habeas data? En caso afirmativo, describa estas disposiciones y adjunte copia de los textos pertinentes.

Constitucionalmente no existe regulación expresa sobre la protección de la privacidad y de los datos, sin embargo, del Art.2 de la Constitución - que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen - se ha reconocido el derecho a la autodeterminación informativa como un derecho fundamental incorporado implícitamente en la Constitución.

En referencia a la libertad de expresión, éste se reconoce en el Art.6 de la Constitución en los términos siguientes: "Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan."

Respecto al Habeas Data, el ordenamiento jurídico salvadoreño carece de esta figura como instrumento diseñado para la protección específica del derecho a la autodeterminación informativa, como manifestación del derecho a la intimidad, sin embargo, partiendo de lo establecido en el Art.2 de la Constitución, que establece que toda persona tienen derecho a ser protegida en la conservación y defensa de sus derechos constitucionales, se infiere que este derecho debe ser tutelado a través de los mecanismos de protección establecidos para su ejercicio.

- D. ¿Existen en su país códigos de conducta de autocontrol u otros sistemas semejantes de responsabilidad por la privacidad y la protección de datos? En caso afirmativo, describa brevemente estos sistemas y adjunte copia de las disposiciones y documentos pertinentes que describan su operación.

En El Salvador no existe normativa que regule expresamente la privacidad y protección de datos, por lo que no existen códigos de auto control o de otros sistemas semejantes para la protección de los referidos derechos. En todo caso, dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño, se encuentran normas dispersas

relacionadas a este aspecto, tales como: el Código de Ética Periodística y el Código Penal al regular los delitos relativos al honor y a la intimidad.

## II. NORMATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO

- A. ¿Cuál es el mecanismo o los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, normas o procedimientos sobre privacidad y protección de datos arriba referidos, y qué recursos pueden interponerse? Describa todos los mecanismos que existan y adjunte copia de los textos o documentos pertinentes.

El Art.247 de la Constitución, en su primer inciso sostiene: “Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la presente Constitución.” Se infiere que los derechos reconocidos, tanto expresa como implícitamente, deben ser garantizados a toda persona a través de los mecanismos de protección establecidos para su ejercicio. De manera que, aunque no se disponga de una normativa específica que los regule, se puede afirmar que la protección de la privacidad y protección de datos pueden ser garantizados a través del proceso constitucional de amparo.

Dentro del ámbito penal, el honor y la intimidad son entendidos como bienes jurídicos merecedores de protección, por lo cual, se han tipificado como delito un conjunto de conductas que suponen una lesión grave a éstos bienes. El Art.28 del Código Procesal vigente indica que éste tipo de delitos son perseguibles sólo por acción privada, es decir, únicamente por acusación de la víctima. Asimismo, dicha norma regula - en los Arts. del 439 al 444 - un procedimiento especial que resulta más rápido al estar estructurado a partir de una regulación propia y etapas más reducidas, que comprenden: a) Presentación de escrito de acusación a un tribunal de sentencia; b) intimación del imputado; c) conciliación; d) audiencia de aportación y admisión de pruebas; y e) vista pública y sentencia.

- B. ¿El ordenamiento jurídico interno de su país prevé la interposición de recursos en el sistema nacional de órganos jurisdiccionales para personas que han sido perjudicadas por violaciones a su privacidad o a la protección de datos? ¿Les otorga a las autoridades gubernamentales facultades para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas pertinentes sobre privacidad y protección de datos? En caso afirmativo, describa y adjunte copia de los textos o documentos pertinentes.

En materia penal, desde el momento en que se inicia un proceso que gira en torno a la posible comisión de alguno de los delitos contra el honor y la intimidad, las partes están facultadas para interponer cualquiera de los recursos regulados en el Código Procesal Penal, es decir; revocatoria, apelación, casación o revisión, según la naturaleza de la resolución impugnada.

Asimismo, ante violaciones a la privacidad y la protección de datos de las personas, se puede iniciar un proceso constitucional de amparo, que - pese a no constituir un recurso propiamente tal - es el instrumento de garantía regulado en la Constitución que tiene por objeto tutelar los derechos constitucionales.

- C. ¿Cuáles son en su país las principales autoridades gubernamentales responsables de la aplicación de las leyes y normas sobre privacidad y protección de datos? Describa su relación con (o independencia de) el gobierno, indique su tamaño en términos de dotación de personal y presupuesto y adjunte copia de los textos o documentos pertinentes.

Aun cuando en el país no existe normativa sobre aplicación de leyes y normas sobre privacidad y protección de datos, las autoridades principales responsables constitucionalmente de la aplicación de leyes en el país son los funcionarios judiciales; en el caso específico del proceso de amparo, su resolución corresponde a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el juzgamiento de los delitos relativos al honor corresponde a los tribunales de sentencia, en atención a la naturaleza privada que poseen los delitos como la calumnia, la injuria y la difamación. Éste proceso debe ceñirse a los principios constitucionales del debido proceso, el juicio previo, el principio de legalidad, juez natural, dignidad humana, igualdad y acceso a la justicia.

Además, sobre la aplicación de leyes y normas, recientemente ha sido creada la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite conocer información a la que se hace referencia, siempre y cuando no se encuentre reservada.

- D. ¿Qué volumen de quejas relacionadas con violaciones de la privacidad y de la protección de datos reciben sus autoridades gubernamentales correspondientes? ¿Estas autoridades abordan individualmente cada queja o tienen discrecionalidad respecto a los asuntos que investigan o procesan?

No se cuentan con datos al respecto.

- E. ¿Las investigaciones y acciones para asegurar la observancia de la privacidad y de la protección de datos son emprendidas por sus autoridades exclusivamente en respuesta a quejas, o tienen esas autoridades otras bases o criterios para seleccionar e iniciar una investigación o acción de este tipo (por ejemplo, auditorías proactivas o requisitos de presentación de documentos)? Explique.

En el ámbito penal las investigaciones relativas a los delitos contra el honor y la intimidad se realizan conforme a denuncia que interpone el ofendido o víctima, es decir, se trata de delitos que, en virtud de su naturaleza, no son perseguibles de oficio.

- F. ¿Las quejas relacionadas la privacidad de datos comerciales se pueden sujetar a posible enjuiciamiento penal? En caso afirmativo, explique la relación, en su caso, entre los responsables de las normas sobre privacidad y los fiscales en tales casos, así como el volumen general y la naturaleza de los procesos penales.

Si, en los delitos contra el patrimonio, principalmente los daños y defraudaciones (Art.218 y 222) y los delitos relativos a la propiedad intelectual (Art.227 y 227-c), la Fiscalía General de la República puede promover la acción penal. Por su parte, conforme al Art.149 de la Ley de Protección al Consumidor, la certificación de la resolución que ponga firme una sanción, tiene fuerza ejecutiva, en caso de que el infractor no le de cumplimiento, la presidencia de la Defensoría remite la certificación a la Fiscalía para que haga efectiva la sanción conforme a los procedimientos comunes.

### III. JURISPRUDENCIA

- A. ¿Cuál es el papel de la jurisprudencia en la protección de la privacidad de las personas en su país? Adjunte los casos de tribunales superiores o de apelaciones en su país.

El Salvador, en el año se 2004 reconoció por primera vez y mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia, como derecho fundamental de todos los salvadoreños, la protección de datos o autodeterminación informativa, derivado de un proceso constitucional de amparo -Ref. 118-2002- que se interpuso contra una empresa dedicada a la recopilación y comercialización de información crediticia. Por ahora, la figura del habeas data sólo puede ser analizada por la misma Corte Suprema de Justicia, al no existir una ley especial que regule la protección de datos en El Salvador.

El 10 de diciembre de 2007, se presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador contra una empresa, por comercializar con cuatro millones de datos personales de salvadoreños sin control alguno y sin el consentimiento de los titulares, violentando el derecho a la protección de datos de todos esos salvadoreños, derecho fundamental ya reconocido por la jurisprudencia del mismo tribunal en el 2004, que se ha vuelto un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento, derivado del Art.2 de la Constitución, que regula el derecho a la intimidad. El 5 de marzo de 2011, la Corte Suprema de Justicia le da la razón al demandante y condena al demandado por violar el derecho a la protección de datos o autodeterminación informativa de los salvadoreños, que se encuentran dentro de su base de datos con fines comerciales. Además les prohíbe vender los datos personales sin el consentimiento de su titular. (Sentencia de Amparo Ref. 934-2007).

### IV. COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

- A. ¿El ordenamiento jurídico interno de su país limita o condiciona la transferencia de cualesquiera datos personales a otros países? En caso afirmativo, explique.



**No se tiene regulación expresa sobre la materia.**

- B. ¿Ha recibido su país una certificación de privacidad y protección de datos de la Unión Europea?

**No se ha recibido en El Salvador ningún tipo de certificación referente a la privacidad y protección de datos.**

- C. ¿Es parte su país de algún instrumento o arreglo internacional relacionado con los principios de privacidad y el flujo transfronterizo de información (por ejemplo, las directrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales; el Marco de Privacidad y las Reglas de Privacidad Transfronterizas del APEC; la Convención ETS No. 108 del Consejo de Europa). En caso afirmativo, enumere los instrumentos o arreglos de los que es parte su país, la fecha en que adquirieron fuerza de ley en su jurisdicción y las acciones que ha adoptado su país, en su caso, para su aplicación.

**No, El Salvador no es parte de los instrumentos o arreglos internacionales arriba mencionados.**

- D. ¿La legislación de su país permite que las autoridades pertinentes encargadas del cumplimiento de las leyes compartan información y pruebas sobre investigación y cumplimiento con autoridades homólogas en jurisdicciones extranjeras? En caso afirmativo, explique.

**El fundamento normativo de la asistencia legal en materia penal en El Salvador, se encuentra en el Art.182, numero 3 de la Constitución de la República, el cual establece las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia en materia de cooperación judicial.**

**Por otro lado, El Salvador es parte de algunos instrumentos internacionales que posibilitan la cooperación con otros gobiernos o autoridades homólogos en jurisdicciones extranjeras. Entre estos instrumentos se encuentran:**

- **Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal**
- **Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de El Salvador y Perú**
- **Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.**
- **Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de El Salvador y la República del Ecuador**
- **Convenio de la República de Argentina y la República de El Salvador sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal.**
- **Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de El Salvador sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.**
- **Comisión Bilateral de Cooperación Judicial en Materia Penal entre el Reino de España y la República de El Salvador.**

- E. ¿Su gobierno o sus autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes cooperan con otros gobiernos o con autoridades homólogas en asuntos de investigación o de cumplimiento relacionados con privacidad y protección de datos, por ejemplo, para hacer frente al uso fraudulento, transferencia o mal manejo de datos personales?

**Los Acuerdos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de El Salvador, no contemplan la transmisión de información de carácter oficioso, dado que se requiere de una solicitud previa del Estado requirente, para darle trámite si ésta reúne las formalidades que, tanto la legislación interna como la normativa internacional, exigen para su procedencia; no obstante, tampoco existen disposiciones legales que lo prohíban expresamente, por lo tanto, la posibilidad de transmitir información existe.**

- F. En caso de existir la colaboración transfronteriza, ¿es informal esta colaboración, ocurre a través de entidades reguladoras de la privacidad y de la protección de datos, o se lleva a cabo a través de redes de cooperación transfronteriza, tales como la Red global de vigilancia de la privacidad (GPEN), el arreglo transfronterizo de vigilancia de la privacidad (Cross Border Privacy Enforcement Arrangement) de la APEC, o la Red Iberoamericana de Protección de Datos? En caso afirmativo, describa esta colaboración o la participación de su país en estas redes.

**El Estado Salvadoreño no es parte de las redes de cooperación transfronteriza a que se refiere esta pregunta.**

- G. De no existir, ¿podría alguna forma de colaboración transfronteriza entre los Estados miembros de la OEA ayudar al cumplimiento o a la implementación de leyes de privacidad y protección de datos en su país? En caso afirmativo, suministre sugerencias sobre lo que podría resultar más útil.

**No existe prohibición legal expresa a efectos de implementar el uso de estas figuras procesales de cooperación. Al amparo de los instrumentos internacionales mencionados en la respuesta "D", existe la posibilidad de efectuar la transferencia de información de documentos o elementos de prueba cumpliendo con los procedimientos y requisitos que cada convención prevé, tanto para el Estado requirente como para el Estado requerido.**

## V. HABEAS DATA

- A. ¿Existen en el ordenamiento jurídico interno de su país leyes que prevean el acceso a la información sobre uno mismo, incluyendo el habeas data? En caso afirmativo, caracterice los derechos que las personas pueden ejercer a través del habeas data, describa brevemente la fuente del derecho, describa si este derecho se aplica a los contextos de los sectores privado o público y adjunte copia de las disposiciones y documentos en que esté previsto,

En el ordenamiento jurídico salvadoreño no aparece la figura del habeas data como instrumento diseñado para la protección específica del derecho a la autodeterminación informativa, como manifestación del derecho a la intimidad.

No obstante, esto no significa que tal derecho queda totalmente desprotegido, pues, partiendo de lo que establece el inciso primero del Art.2 de la Constitución, así como el Art.247 del mismo cuerpo normativo legal que indica que: “toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la presente Constitución”; se infiere que, tanto los derechos reconocidos expresamente como los contenidos implícitamente, deben ser garantizados a toda persona a través de los mecanismos de protección establecidos para su ejercicio.

## VI. DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES

- A. ¿Existen tecnologías o prácticas empresariales que planteen desafíos particulares para la aplicación o la implementación de las leyes de privacidad y protección de datos o de otras leyes de protección del consumidor en su país? En caso afirmativo, descríbalas.

Actualmente la información de datos, principalmente dentro de las empresas financieras del país, fluyen fácilmente de un lugar a otro, de una persona a otra, etc.; sin embargo, esto ha generado una serie de problemas, los cuales el derecho no puede ignorar, ya que la información privada y sensible de las personas debe ser justamente así, privada; y los sujetos son quienes deciden cómo se divulgará ésta información, ejerciendo el derecho de decidir si estos datos personales y privados se exponen o no al conocimiento de otras personas o entidades.

Los sistemas de bases de datos se han convertido en un instrumento muy útil para las empresas en los distintos ámbitos en donde se desenvuelven; no obstante, al mismo tiempo han arrojado un resultado muy distinto para los usuarios de estas entidades y consecuentemente acarrear un problema para éstos.

El uso de estas bases de datos ha causado conflicto en las distintas áreas en donde este mecanismo se ha utilizado, por lo que en el ordenamiento jurídico salvadoreño se ha vuelto imperante la necesidad de contar con un instrumento ágil para preservar el derecho a su privacidad y su autodeterminación informativa: el habeas data.